

La protesta social en la Argentina entre los setenta y los noventa. Actores, repertorios y horizontes¹.

**Ana Julia Ramírez
Aníbal Viguera**

Las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, que culminaron con la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, constituyen el punto culminante de un proceso de activación social y política en el que convergieron diversos actores movilizados y reclamos acumulados durante la década de los 90. Ante la rápida aceleración y una evidente radicalización de sentidos y repertorios, fue difícil evitar la tentación de comparar esta coyuntura con el proceso de creciente movilización y radicalización que había caracterizado a la primera mitad de la década del 70. Aunque las diferencias saltaban rápidamente a la vista, no podía evitarse la sensación de estar ante una nueva oleada de activación social y política de horizontes inciertos e imprevisibles que remitía a los 70 como el período comparable más cercano. En este artículo nos proponemos reconstruir un panorama de las formas y sentidos de la protesta social en la Argentina desde los años 70 hasta la actualidad, intentando poner en perspectiva histórica los hechos más recientes.

Cualquier análisis de la protesta social debe partir sin duda de reconocer que la misma se explica a partir del conflicto estructural básico de toda sociedad capitalista, la disputa hegemónica entre capital y trabajo y por extensión entre sectores dominantes y subalternos. Sin embargo, como han señalado diversos autores, las características, sentidos, y alcances de la acción colectiva de protesta no pueden explicarse solamente identificando la existencia de “agravios” o demandas; se requiere en cambio reconstruir el conjunto de procesos, mecanismos, trayectorias e interacciones que constituyen lo que siguiendo a Auyero, podemos denominar el “campo de protesta”². Creemos que el concepto, utilizado por Auyero para explicar procesos locales de movilización colectiva, puede extrapolarse para pensar en la conformación, durante un período determinado, de un “campo de protesta” a nivel nacional, que en buena medida preside la dinámica que toma la acción colectiva en el marco de una configuración política específica. En el caso de la Argentina, proponemos un itinerario de la protesta en el que identificamos dos “campos de protesta” con características diferentes: uno que se origina a partir de la caída del peronismo en 1955 y toma una forma definida entre 1966 y 1973, y otro que, tras el abrupto corte que provocó la dictadura militar, se conforma en torno a los procesos de ajuste y reforma económica que la década de 1990 llevó a su máxima expresión.

Exclusión política, dictadura y radicalización (1955-1973)

En términos generales, el campo de protesta que se constituyó entre fines de los 60 y principios de los 70 tuvo como rasgos distintivos: 1) la expansión del espectro de actores involucrados en prácticas de acción colectiva; 2) la incorporación a los repertorios de acción y movilización tradicionales de rutinas de acción directa con un alto contenido de violencia; y 3) la ampliación del horizonte de expectativas que manifestaron los sectores movilizados a medida que los reclamos sectoriales comenzaron a articularse con propuestas de transformación política y social de mayor alcance. Este proceso de construcción de un nuevo campo de protesta no se da de manera lineal ni de un día para el otro: para comprenderlo debemos remontarnos someramente hasta 1955, ya que es allí donde se originan algunos de los procesos fundamentales que están en la base de la dirección y de las formas que tomará la acción colectiva desde 1969.

¹ Por aparecer en *Matériaux pour l'histoire de notre temps*, N° 77. Paris.

² Cfr. Auyero, Javier. “Los estallidos en provincia: globalización y conflictos locales”. *Punto de Vista*, N° 67, agosto de 2000, pág. 41.

A partir del derrocamiento de Juan Domingo Perón ocurrido en 1955, la incapacidad de sucesivos regímenes militares y civiles para estabilizar un orden alternativo al populismo y reintegrar a las mayorías populares al juego político-electoral, y la incipiente implementación de políticas económicas de corte desarrollista tendientes a la modernización de la estructura productiva, lejos de apaciguar agudizaron los conflictos heredados del 55. A ello se suma, durante los tempranos 60, la expresión autóctona de la cultura juvenil contestataria, que en el contexto de la proscripción de las mayorías populares y al calor de la Revolución Cubana, tiende a una radicalización política e ideológica. Al calor de estos procesos algunos sectores ensayaron nuevas formas de protesta colectiva.

La llamada “Revolución Libertadora” que destituyó a Perón tenía entre sus objetivos fundamentales implementar un modelo político y económico alternativo al populismo, para lo cual resultaba indispensable neutralizar la capacidad de acción del movimiento obrero organizado en tanto columna vertebral del movimiento peronista. A tal efecto, intervino la Confederación General del Trabajo, proscribió al Partido Justicialista y prohibió por decreto la mera mención oral o escrita del líder exiliado. En este contexto de desarticulación del movimiento sindical y ataque directo a la identidad de la clase obrera, grupos aislados de trabajadores iniciaron acciones de resistencia que consistían fundamentalmente en sabotajes a la producción y el trabajo a desgano –movimiento que se denominó “Resistencia peronista”-. Si bien esta metodología de lucha comenzó rápidamente a expandirse entre sectores cada vez más amplios de trabajadores, éstos no lograron organizar una estructura que dirigiera y sincronizara tales acciones. El pronto proceso de reinstitucionalización del sistema parlamentario hacia 1958, desarticuló esta forma de protesta. Perón desde el exilio pactó con el candidato a presidente Arturo Frondizi su apoyo electoral a cambio de la re-legalización de la estructura sindical y el posterior levantamiento de la proscripción política al Partido Justicialista. El triunfo de Frondizi y la inmediata normalización de la CGT, en consecuencia, reinstauraron a la dirigencia sindical de origen peronista en el centro de la lucha corporativa. En tanto presiones en contrario no permitieron la rehabilitación del Partido Justicialista, el movimiento sindical se convirtió de hecho en la voz política del peronismo³.

Por otra parte, y ligado al proceso de radicalización político-ideológica y al fuerte impacto producido en nuestro país por la revolución cubana, ya en 1959 surgen las primeras experiencias aisladas de guerrilla rural en Tucumán, Salta y Catamarca, aunque rápidamente desarticuladas por las fuerzas de seguridad. Si bien estas primeras experiencias de acción directa serán prontamente recuperadas por algunos sectores como origen de un proceso revolucionario en la Argentina, lo real es que, a pesar de ellas, lo que prevaleció durante los tempranos ‘60 fue un campo de protesta constituido mayoritariamente por obreros y estudiantes, que podríamos definir como tradicional y fragmentario. Tradicional, porque la estructura, las prácticas y la matriz ideológica que sustentaban a las organizaciones sindicales y estudiantiles representaban una continuidad respecto de sus orígenes; y fragmentario, porque sus acciones se limitaban a reclamos sectoriales.

A pesar de ello, la creciente burocratización de las estructuras sindicales, la colaboración de la dirigencia nacional de la CGT con sectores del poder y su consecuente centralización y verticalismo, comenzaron a generar fuertes cuestionamientos de parte de sectores sindicales más combativos aglutinados, sobre todo, en el interior del país. Entre los estudiantes, por su parte, comenzaron también a tomar cuerpo planteos más ambiciosos que predicaban la ampliación del horizonte del movimiento estudiantil. La iglesia católica, asimismo, sufría un proceso similar de cuestionamientos internos por parte de clérigos y laicos que veían en la estructura institucional una fuerte tendencia hacia el conservadurismo que no respondía a los verdaderos objetivos del cristianismo; y sectores de la intelectualidad y la militancia política de la izquierda tradicional

³ James, Daniel. *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 1946-1976*. Buenos Aires, Sudamericana, 1990. Torre, Juan Carlos. *Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, Biblioteca Política Argentina N° 30, 1983.

rompían con sus viejas estructuras partidarias profundamente resistentes a replantear sus posturas antiperonistas y sus posiciones políticas reformistas⁴.

Estas tendencias contestatarias en el corazón mismo de instituciones sociales y políticas de gran envergadura en la vida nacional van a profundizarse fuertemente a partir de 1966, con el advenimiento del régimen autoritario de la “Revolución Argentina”. El nuevo régimen dictatorial presidido por el General Juan Carlos Onganía mostró rápidamente un espíritu profundamente conservador y autoritario que se expresó contra los partidos políticos que fueron disueltos por decreto, las universidades nacionales que fueron intervenidas, la producción cultural que fue fuertemente censurada, y, a pesar del apoyo inicial que le brindó la CGT, también contra el movimiento sindical, interviniendo las direcciones de varios gremios importantes. Este shock autoritario va a impactar fuerte y decisivamente en la constitución de un nuevo campo de protesta que se expresará con cada vez mayor contundencia a partir de 1969. Si en un principio las políticas autoritarias de la dictadura harán retroceder casi toda manifestación de protesta abierta, paralelamente también ampliarán el espectro de excluidos políticos, introducirán una cuña profunda dentro del movimiento sindical, y profundizarán las tendencias hacia la radicalización ideológica y política sobre todo entre los sectores juveniles. Las políticas económicas del nuevo régimen dictatorial, por su parte, ahondarán el descontento de los sectores subalternos pero también de grupos de la elite marginados del nuevo esquema productivo tendiente a la modernización y transnacionalización de la economía y a la concentración del capital. De esta manera, lejos de sus pretensiones de lograr reducir el conflicto social y político para imponer un nuevo modelo económico, la “Revolución Argentina” comenzó rápidamente a ampliar el abanico opositor.

En este nuevo contexto, comenzaron a tomar cuerpo y fuerza nuevas organizaciones que promovieron vías alternativas de confrontación a las políticas económicas y autoritarias del gobierno y un cuestionamiento más profundo a la dictadura como régimen político. El movimiento estudiantil fue el primer núcleo activo de oposición al régimen de Onganía. La resistencia estudiantil a la intervención de las universidades produjo las primeras movilizaciones callejeras en las que los enfrentamientos con la policía comenzaron a dejar como saldo un número creciente de detenidos, heridos, e incluso muertos. En estas luchas, junto a los reclamos por la restitución de la autonomía universitaria y el aumento del presupuesto para los comedores estudiantiles comenzaron a aparecer cuestionamientos a las autoridades nacionales e incluso universitarias visualizadas como “personeros del imperialismo” o representantes de la gran burguesía nacional y transnacional.

En el campo del sindicalismo, la actitud colaboracionista de la burocracia sindical con la dictadura abrió una importante brecha por donde se coló una nueva dirigencia combativa. Hacia fines de 1967, en oportunidad de elegir nuevas autoridades nacionales, las representaciones gremiales sobre todo del interior del país lograron imponer candidatos combativos en la dirección de la CGT. Los viejos líderes sindicales, con Augusto Vandor a la cabeza, se negaron a reconocer dicha elección y a partir de 1968 se conformaron dos centrales gremiales. En la tradicional CGT quedaron nucleados la mayoría de los gremios más importantes dirigidos por los llamados “participacionistas”, mientras que la nueva CGT de los Argentinos (CGT “A”) venía a representar a aquellos gremios que propugnaban una democratización de las estructuras sindicales en conjunción con una mayor oposición a la dictadura -gremios sobre todo del interior y de menor peso político, pero que sin embargo demostraron una gran capacidad de autonomía e iniciativa⁵. A tal efecto, la novedosa central sindical comenzó a promover simultáneamente la descentralización operativa de los gremios afiliados y la unidad de acción entre ellos y sectores estudiantiles, intelectuales, religiosos y políticos para “la construcción y coordinación de un bloque de resistencia multisectorial

⁴ Sarlo, Beatriz. *La batalla de las ideas (1943-1973)*. Buenos Aires, Ariel, 2001. Altamirano, Carlos. *Bajo el signo de las masas (1943-1973)*. Buenos Aires, Ariel, 2001.

⁵ James, Daniel. “Sindicatos, burócratas y movilización”. En: James, Daniel, ed. *Nueva Historia Argentina. Tomo IX: Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*. Buenos Aires, Sudamericana, 2003.

como estrategia de lucha antidictatorial y por la emancipación de los trabajadores”⁶. De este modo, la convergencia de la lucha de un nuevo sindicalismo combativo con otros sectores radicalizados, sobre todo con el movimiento estudiantil, comenzó a resquebrajar el “orden” impuesto por las FFAA desde 1966. La fuerte reactivación de la acción colectiva hacia 1968 ya ponía de manifiesto los rasgos sobresalientes que caracterizarán al nuevo campo de protesta en desarrollo –un campo que llamaremos contestatario y tendiente a la articulación de reclamos sectoriales con proyectos políticos alternativos.

Hacia principios del 69 las movilizaciones obreras y estudiantiles se expandieron por numerosas ciudades del interior y la ola represiva creció en consecuencia, dejando como saldo varios muertos. En este marco el gobierno embistió contra algunos derechos laborales que beneficiaban sobre todo a los trabajadores del interior. La presión de las bases obreras llevó a las dos centrales sindicales a convocar a un paro nacional conjunto por 24 hs contra la represión y la política económica del gobierno, que en la ciudad de Córdoba derivó en una insurrección popular conocida como el “Cordobazo” (29 y 30 de mayo de 1969). La intervención policial en Córdoba incentivó una escalada de enfrentamientos y reagrupamientos en la que a los sectores obreros inicialmente movilizados comenzaron a sumarse nuevos contingentes de estudiantes radicalizados y vecinos cansados del autoritarismo del régimen. Hacia la tarde del 29 el pueblo cordobés había desbordado a la policía y comenzaba a enfrentarse con el ejército- que no retomó el control total de la ciudad sino hasta el final del día siguiente. El “Cordobazo” tuvo como resultado inmediato más de 40 muertos, centenares de heridos, la destrucción de comercios pertenecientes en su mayoría a compañías extranjeras y la destitución del ministro de economía de la nación y del gobernador de la provincia de Córdoba, pero más importante aún, esta pueblada marcó el inicio del fin de la “Revolución Argentina” y el punto de partida de un ciclo de protesta sin precedentes en nuestro país⁷.

Luego del Cordobazo la protesta popular pasó de una etapa sobre todo defensiva a otra de fuerte ofensiva⁸. Se desarrolló una ampliación acelerada de nuevos actores y organizaciones contestatarios y la multiplicación de rutinas de acción directa con un alto contenido de violencia, cuya expresión más espectacular fue la emergencia en el espacio público de organizaciones armadas provenientes tanto de la izquierda como del peronismo⁹. Entre mayo de 1969 y 1972 estallaron al menos 13 insurrecciones en ciudades del interior del país, mejor conocidas como puebladas. En varias de ellas junto a obreros y estudiantes manifestaban activa y públicamente su repudio al régimen militar incluso sectores de las elites locales, mientras que en algunas otras, consignas anticapitalistas y carteles que celebraban a las organizaciones armadas revolucionarias marcaban el tono sostenido de la protesta¹⁰. Estas organizaciones, por su parte, comenzaron una escalada de acciones armadas y adquirieron cada vez mayor predicamento sobre todo entre los sectores

⁶ Bozza, Juan Alberto. “Resistencia y radicalización. La CGT de los Argentinos, un ámbito de convergencia de la nueva izquierda”. Ponencia presentada en las *IX Jornadas Interescuelas y Departamentos de Historia*, Córdoba, septiembre 2003.

⁷ Brennan, James P., 1996. *El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba, 1955-76*. Buenos Aires, Sudamericana. Gordillo, Mónica. *Córdoba en los '60: la experiencia del sindicalismo combativo*. Córdoba, Dirección General de Publicaciones de la UNC, 1996. Balbé, Beba y Balbé Beatriz. *El '69. Huelga política de masas. Rosarizao-Cordobazo-Rosarizao*. Buenos Aires, Contrapunto, 1989.

⁸ Gordillo, Mónica. “Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha armada, 1955-1973. En: James, Daniel, ed. *Nueva Historia Argentina. Tomo IX: Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*. Buenos Aires, Sudamericana, 2003.

⁹ Tortti, María Cristina. “Protesta social y ‘nueva izquierda’ en la Argentina del Gran Acuerdo Nacional. En: Pucciarelli, Alfredo, ed. *La primacía de la política*. Buenos Aires, Eudeba, 1999.

¹⁰ Crenzel, Emilio. *El Tucumanazo*. Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 1997. Aufgang, Lidia. *Las puebladas. Dos casos de protesta: Cipolletti y Casilda*. Buenos Aires, CEAL, 1996. Ramírez, Ana Julia. “Las puebladas en la Argentina de los '70: el caso de General Roca, julio 1972”. Ponencia presentada en las *Terceras Jornadas de Sociología de la UNLP*, diciembre 2003.

estudiantiles¹¹. Las tomas de fábricas y facultades con rehenes pasaron a ser moneda corriente entre obreros y estudiantes. Sectores obreros de algunas de las industrias de punta y mejor pagos del país se encolumnaron tras las banderas del clasismo sindical. Organizaciones de familiares en defensa de los presos políticos y gremiales y nuevas organizaciones sindicales que nucleaban a sectores profesionales, ahora identificados con su rol de “trabajadores” y en muchos casos con estrechos lazos con los movimientos revolucionarios, se multiplicaban por todo el país¹². En este nuevo campo de protesta, el conflicto tiende a polarizarse entre el pueblo y la dictadura, aunque a esta dicotomía se le empiezan a superponer, confundiendo en ocasiones, otras oposiciones acordes con el tono ideológico general de la época como revolución o reforma, liberación o dependencia, socialismo o capitalismo.

La expansión acelerada del campo de protesta y la ampliación del horizonte de demandas comenzaron a producir una profunda incertidumbre entre los sectores gobernantes y grupos de poder que, tras la destitución de Onganía y del efímero interregno del General Levingston, decidieron realizar un cambio estratégico de mayor alcance en la política de la Revolución Argentina. El nuevo presidente, General Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973) fue el encargado de idear el plan político que intentará una retirada airosa del régimen militar. El llamado a un “Gran Acuerdo Nacional” (mayo 1971) por parte del presidente tenía como objetivo acordar un proceso de transición democrática con los principales partidos políticos rehabilitados a tal efecto hacia fines de 1971 -incluido el peronismo luego de 18 años de proscripción-, para encauzar la protesta dentro de los marcos de la contienda electoral y las viejas estructuras partidarias¹³. A pesar del buen recibimiento de la propuesta por parte de la gran mayoría de las dirigencias tradicionales (incluidos los sindicalistas participacionistas y el propio Perón) y el encauzamiento de la protesta hacia la contienda electoral, el GAN, sin embargo, no logró desactivar a los sectores movilizados. Al contrario, la competencia política comenzó a adquirir la forma y el tono prevalecientes dentro del campo de protesta: la multitud en las calles emergió como una forma fundamental de acumulación de poder político. Dentro de esta lógica no sorprende que hayan sido los sectores más radicalizados del peronismo los que, dentro del campo contestatario, hayan logrado mayor predicamento. Avalados por el pragmatismo de su líder exiliado, por su propia lucha contra la dictadura, y bajo la consigna “Luche y Vuelve”, la Tendencia Revolucionaria del Peronismo –nucleamiento de las organizaciones de masas de la Juventud Peronista y cuya línea política era aquella sostenida por su brazo armado, Montoneros- se transformó entre 1972 y 1973 en referente de los sectores contestatarios (incluso de sectores de la izquierda no peronistas que veían en su crecimiento la posibilidad más concreta de comenzar a avanzar por el camino del socialismo).

La Juventud Peronista se convirtió así en un eje capaz de nuclear a la amplia y variada gama de demandas, aspiraciones y sectores movilizados hacia una alternativa política concreta: la candidatura de Héctor Cámpora primero y el retorno de Perón después. Ello no significaba, por supuesto, que todos aquellos que apoyaron esta opción compartieran un mismo proyecto político. Al contrario, mientras que para los sectores revolucionarios del peronismo el triunfo electoral significaba el primer paso hacia la “patria socialista”, para muchos otros no peronistas significaba la única alternativa de pacificación social. Para la gran mayoría de los sectores populares, por su parte, el triunfo electoral del peronismo significaba la garantía de un nuevo orden idealizado sobre la base de una particular representación del primer peronismo: distribución más equitativa del ingreso, respeto y expansión de derechos laborales, fuerte organización sindical de base, y un modelo de desarrollo en beneficio de un proyecto nacional y popular. En este sentido, la ofensiva de la protesta no sólo desafiaba la capacidad de maniobra política de los sectores dominantes desde una retórica

¹¹ Gillespie, Richard. *Soldados de Perón. Los Montoneros*. Buenos Aires, Grijalbo, 1987. Anzorena, Oscar. *Tiempo de violencia y utopía (1966-1976)*. Buenos Aires, Contrapunto, 1988. Ollier, María Matilde. *El fenómeno insurreccional y la cultura política (1969-1973)*. Buenos Aires, CEAL, 1986.

¹² Chama, Mauricio. “Compromiso político y práctica profesional a principios de los ’70: el caso de la Asociación Gremial de Abogados”. *Sociohistórica*, N° 7, 2000.

¹³ De Amézola, Gonzalo. “El caso del realismo insuficiente. Lanusse, la Hora del Pueblo y el Gran Acuerdo Nacional”. En: Pucciarelli, Alfredo, ed. *La primacía de la política*. Buenos Aires, Eudeba, 1999.

revolucionaria, sino que también implicaba un obstáculo mucho más concreto a sus recurrentes intentos por afianzar un nuevo modelo de acumulación -tarea en la que venían fracasando desde 1955, y que había generado procesos cuya dirección y desenlace aparecían cada vez más inciertos.

El poco sorprendente triunfo electoral de Cámpora, con el 49% de los votos, inaugura el tercer gobierno peronista que asumió el poder en el marco del contexto de fuerzas señalado y de cara a un campo de protesta todavía fuertemente activado. Si, por una parte, el “Pacto Social”, propiciado por el gobierno y firmado por los representantes sindicales y empresarios, pretendía marcar el tono de la futura convivencia económica, la manifestación masiva a Plaza de Mayo el día de la asunción presidencial (25 de mayo), la liberación de todos los presos políticos y gremiales a causa de la presión de grupos movilizados frente a las cárceles, y la masiva oleada de tomas que se sucedieron entre junio y julio de 1973 pretendieron marcar el ritmo de la futura convivencia política. Estas movilizaciones ponían de manifiesto el alcance del proceso de movilización experimentado durante la dictadura y el sentido que durante la misma había adquirido el retorno a la democracia. Esta no significaba el mero retorno al juego electoral y al sistema parlamentario sino también una muy activa participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas. Buena parte de las tomas, por ejemplo, tenían como objetivo desplazar de sus puestos a las personas que habían ejercido los cargos jerárquicos durante la dictadura en escuelas, hospitales, fábricas, teatros, medios de comunicación, dependencias del estado, y otros muchos establecimientos¹⁴.

A pesar de ello, y en gran medida contra ello, las fuerzas de la derecha peronista retomaron pronto la iniciativa con el apoyo del propio Perón que, luego de un golpe palaciego que desplazó a Cámpora, retornó definitivamente al país para hacerse cargo en persona del gobierno. Comienza de este modo una política de desactivación de los sectores movilizados y desarticulación del campo de protesta. La creación de estructuras parapoliciales para la persecución y asesinato de dirigentes políticos y militantes revolucionarios (peronistas y no peronistas) marcó el giro abrupto que tomó el gobierno, sobre todo luego de la muerte de Perón el 1 de Julio de 1974 y de la asunción de su vicepresidenta y viuda, Isabel Martínez. El estallido de la crisis del petróleo tiró por la borda los restos debilitados de un Pacto Social casi imposible desde su origen, mientras las organizaciones armadas entraban en un proceso de profunda militarización y desarticulación con el conflicto social, y las distintas fracciones del peronismo se disputaban los pedazos de un gobierno fracturado. Hacia 1975 el intento del ministro Celestino Rodrigo por imponer un plan económico de ajuste hizo resurgir la protesta obrera. Por primera vez en la historia la CGT organizó un paro general durante un gobierno Peronista. Como tantas otras veces, sin embargo, la movilización masiva logró la destitución del ministro. El campo de protesta todavía no había sido totalmente desarticulado¹⁵.

Genocidio y recuperación democrática (1976-1989)

El golpe militar del 24 de marzo de 1976 tuvo como objetivo fundamental producir una drástica reversión del nivel y del contenido contestatario que había alcanzado el proceso de activación y radicalización política que hemos descripto hasta aquí. La feroz represión desatada por las FFAA, cuyo saldo más trágico fue la detención, tortura y asesinato de alrededor de 30.000 militantes políticos, se proponía una meta mucho más amplia que la de terminar de derrotar a las organizaciones armadas revolucionarias: se trataba de inclinar decididamente la balanza de fuerzas a favor de los sectores dominantes de la sociedad, disciplinando a los sectores populares y particularmente al movimiento obrero organizado, cuya capacidad de veto y de resistencia frente a las ofensivas empresarias seguía siendo, desde la perspectiva de éstos, un obstáculo para la acumulación de capital.

¹⁴ Nievas, Flabián. “Cámpora: primavera-otoño. Las tomas”. En: Pucciarelli, Alfredo, ed. *La primacía de la política*. Buenos Aires, Eudeba, 1999

¹⁵ Svampa, Maristella. “El populismo imposible y sus actores, 1973-1976”. En: James, Daniel, ed. *Nueva Historia Argentina. Tomo IX: Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*. Buenos Aires, Sudamericana, 2003. De Riz, Liliana, 1981. *Retorno y derrumbe: el último gobierno peronista*. México, Folios.

Producida la toma del poder por las FFAA, y paralelamente a la escalada represiva, la proscripción de los partidos políticos, la intervención de los principales sindicatos y la disolución de la CGT produjeron rápidamente un brutal retroceso en la acción colectiva de protesta. Si bien se registran numerosos episodios de resistencia focalizados sobre todo en el nivel de fábricas o de sindicatos locales¹⁶, en términos generales las estructuras de la movilización política y social quedaron prácticamente desarticuladas.

En este sentido, la dictadura militar provocó un cambio sustantivo en los patrones, contenidos y alcances de la acción colectiva de protesta en la Argentina. Cuando ésta comience a tomar fuerza nuevamente, a partir de 1980-81, el nuevo eje convocante será la oposición al régimen militar y la búsqueda de un proceso de salida hacia la democracia. Esta convocatoria irá articulando progresivamente a un conjunto variado de actores y organizaciones, entre ellos los partidos tradicionales y los sindicatos¹⁷. Pero sin duda los pioneros en la lucha contra la dictadura fueron los organismos de defensa de los derechos humanos; ellos fueron, sobre todo, los primeros en darle a la misma un sentido que iba más allá de la recuperación de la institucionalidad democrática para incluir decididamente en la agenda el reclamo de esclarecimiento, juicio y castigo de una represión que lentamente empezaba a visualizarse como un verdadero genocidio. Entre ellos, serían las Madres de los Desaparecidos las que impulsarían la acción colectiva más contundente y novedosa, instalando un repertorio que se convertiría en emblemático: las “rondas” en torno a la pirámide de la Plaza de Mayo, en las que las madres portarían pañuelos blancos alusivos a cada uno de sus hijos desaparecidos (de ahí su denominación como agrupación, “Madres de Plaza de Mayo”)¹⁸.

El reclamo generalizado por la transición a la democracia incorporaba un sentido que resultaba novedoso en la trayectoria del sistema político argentino. Si de algún modo la coyuntura de 1973 también había sido una transición a la democracia, en aquel momento el sentido predominante no era la recuperación del régimen democrático *en tanto que tal*, sino la posibilidad del retorno al poder de un movimiento cuya esperada orientación “nacional y popular” era la expectativa que tendía a subordinar a otras virtudes más “formales” del sistema constitucional; aun para los actores movilizados que no apostaban al peronismo lo que estaba en juego era el avance hacia una transformación revolucionaria de la sociedad y no la vigencia *per se* de los mecanismos constitucionales. En 1983, en contraste, la protesta colectiva contra la dictadura emerge dotada de una direccionalidad mucho más centrada en la recuperación de la posibilidad misma del ejercicio democrático, con un énfasis quizá inédito en el valor de los mecanismos electorales, las libertades públicas, la tolerancia política, y la vigencia de los derechos humanos. Sin duda la movilización contra el régimen militar no estaba exenta de una fuerte crítica a las políticas económicas implementadas por éste, pero este eje del reclamo aparecía, en un equilibrio inverso al de 1973, visiblemente subordinado a la expectativa del retorno a la vigencia de la Constitución. En todo caso, el horizonte de la protesta ya emergía con un perfil visiblemente acotado: democracia y oposición a las políticas neoliberales, vigencia de la constitución y vuelta a políticas redistributivas, contrastaban, en tanto ejes articuladores predominantes en la movilización colectiva, con las dicotomías capitalismo-socialismo, liberación-dependencia, democracia burguesa-revolución que permeaban –aunque no de manera absoluta ni excluyente– a la protesta de los años 70.

Una vez instalado el gobierno radical presidido por Raúl Alfonsín, los actores políticos tradicionales y repertorios clásicos como la huelga vuelven a adquirir centralidad en el campo de la protesta. La CGT se unifica y se constituye en un poderoso aglutinador de protestas sindicales en una renovada puja por la distribución del ingreso que se agudizará a partir de fines de 1984 en la

¹⁶ Pozzi, Pablo. *Oposición obrera a la dictadura*. Buenos Aires, Contrapunto, 1988.

¹⁷ Novaro, Marcos y Vicente Palermo. *La dictadura militar 1976/1983. Del golpe de estado a la restauración democrática*. Buenos Aires, Paidós, 2003. Quiroga, Hugo. *El tiempo del “Proceso”. Conflictos y coincidencias entre políticos y militares, 1976-1983*. Rosario, Editorial Fundación Ross, 1994.

¹⁸ Jelin, Elizabeth. "La política de la memoria: el movimiento de derechos humanos y la construcción democrática en la Argentina". En AAVV, ed., *Juicio, castigo y memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1995.

medida en que la presión inflacionaria vaya llevando al nuevo gobierno por la senda del ajuste y de los acuerdos con los organismos internacionales de crédito. Por su parte, mientras los dos partidos mayoritarios se abocarán fundamentalmente a la disputa por el espacio electoral y parlamentario, a la izquierda del espectro político varias agrupaciones –algunas de antigua presencia en el sistema político- operarán como catalizadoras de la movilización colectiva (Partido Comunista, Movimiento al Socialismo, Partido Intransigente, Partido Obrero, entre otros).

Dos repertorios clásicos serán los predominantes durante el gobierno de Alfonsín. Por un lado las huelgas, que canalizan diversos reclamos sectoriales cuyo patrón común es la lucha por mantener el nivel del salario frente a la inflación y los ajustes; por el otro las movilizaciones callejeras, con ciertos itinerarios tradicionales propios de cada ciudad, que en Buenos Aires incluye en casi todos los casos a la Plaza de Mayo y al Congreso Nacional como puntos focales. Muchas de estas movilizaciones son complementarias de las huelgas sectoriales y no trascienden a los actores directamente involucrados. Otras en cambio se vuelven más masivas y articulan la presencia colectiva de actores diversos en torno a clivajes de orden más general. En el plano de la contestación vinculada a las políticas socioeconómicas, las movilizaciones masivas se producen o bien en torno a reclamos sectoriales que adquieren una particular repercusión pública como por ejemplo los de los docentes (con un pico en la “Marcha Blanca” de 1988), o bien cuando –acompañada o no de una huelga general- la protesta adquiere un tono de rechazo integral a las políticas gubernamentales y/o a la influencia de los organismos internacionales sobre temas como el ajuste o la deuda externa.

Otro eje en torno al cual se producirán varios momentos de confluencia de actores colectivos diversos, aunque particularmente de los organismos de Derechos Humanos y partidos de izquierda, es el que continúa articulando el reclamo por el juicio y castigo a los militares. En este caso la protesta seguirá el ritmo que marcan las alternativas de la política gubernamental sobre la cuestión: si las modalidades y alcances del inicial juicio y condena de las Juntas Militares serán objeto de discusiones al interior del movimiento por los derechos humanos, el ulterior retroceso hacia leyes que dejaban impunes a los cuadros intermedios (como las de “Punto Final” y “Obediencia Debida”) volverá a impulsar el reclamo unánime en torno al tema.

Nuevos horizontes de la protesta: neoliberalismo, exclusión y antipolítica

La dinámica de la protesta conservó durante todo el gobierno de Alfonsín un carácter fuertemente sectorial, débilmente articulado en torno a algún horizonte que trascendiera la creciente acumulación de conflictos relacionados con una puja distributiva agudizada en un contexto en el que la espiral inflacionaria terminaría por presidir los acontecimientos. En efecto, el gobierno no logró -salvo en acotadas coyunturas- controlar la escalada de precios, y a partir de comienzos de 1989 ésta se aceleró brutalmente desembocando en una situación hiperinflacionaria. Las elecciones presidenciales de mayo de 1989 realizadas en pleno desborde de las variables económicas dieron el triunfo al candidato del Partido Justicialista Carlos Menem, a quien Alfonsín entregó el mando varios meses antes de la fecha prevista para el recambio. Los saqueos a supermercados y comercios que tuvieron lugar entre mayo y junio de 1989 pueden interpretarse más como una reacción desesperada de los sectores más vulnerables, que como una forma de acción colectiva de protesta. El contexto de la asunción de Menem estuvo marcado, entonces, por la fuerte expectativa de que el nuevo gobierno lograra “poner orden” en las variables económicas. El horizonte de las demandas se volvía cada vez más inmediato: la búsqueda de la estabilidad económica empezaba a presidir todas las expectativas, y fue éste sin duda un factor decisivo que le permitió a Menem embarcarse en un proyecto de ajuste y reforma económica de sesgo neoliberal.

Desde 1991 la política económica de Menem, después de un período de oscilaciones y pocos logros en materia de lucha antiinflacionaria, encontró un nuevo equilibrio en torno al programa de reformas implementado por el Ministro de Economía Domingo Cavallo. El “Plan de Convertibilidad” articuló una serie de medidas de alcance inédito como las privatizaciones, apertura comercial externa, desregulación de los mercados y ajuste fiscal que logró consolidar por varios

años una situación de inédita estabilidad económica. Pero por debajo de la estabilidad irán apareciendo los efectos negativos de un proyecto neoliberal que destruía núcleos importantes del aparato productivo sin reemplazarlos por nuevos focos dinámicos y sostenibles de crecimiento al mismo tiempo que dismantelaba drásticamente buena parte de las estructuras estatales que promovían la integración social. El saldo más visible de este proceso será el súbito incremento del desempleo abierto (que en 1995 arrojaba la inédita proporción del 18%), y el aumento de las formas precarias de inserción laboral (tanto dentro del ámbito del sector informal como en el del sector formal). El correlato de esta tendencia al deterioro del mercado de trabajo será el también rápido e inédito aumento de la pobreza y la indigencia.

En el nuevo contexto generado por las políticas neoliberales, la protesta colectiva irá convergiendo progresivamente en torno a ciertas pautas que en conjunto terminan por constituir un nuevo “campo de protesta” muy diferente a aquél de los años 70. En una primera etapa, las acciones de protesta estuvieron protagonizadas fundamentalmente por distintos sectores que iban resultando directamente “afectados” por las políticas menemistas: empleados estatales (nacionales o provinciales), jubilados, docentes, etc. Una todavía frágil articulación discursiva recorría todas estas protestas sectoriales, y era la que identificaba como responsables a las políticas neoliberales y a sus impulsores locales o internacionales. Sólo algunos gremios (los de sectores tempranamente afectados) y los partidos de izquierda participaban de este proceso de generalización del conflicto, mientras los sindicatos tradicionales y la CGT sostenían una postura de moderada oposición o hasta de aquiescencia con el gobierno, buscando negociar ciertos aspectos de las reformas laborales y sindicales¹⁹. La potencial convergencia de protestas específicas en un proyecto más amplio de oposición al neoliberalismo se vio obstaculizada en una primera etapa por el “efecto éxito” que generó la estabilidad alcanzada a partir de 1991 con el Plan de Convertibilidad: frente a la memoria de la hiperinflación y ante la reaparición del crédito, en buena parte de la sociedad, incluso en sectores populares, logró imponerse la percepción de que “las cosas estaban mejor”²⁰.

Un impulso importante en el camino de la confluencia de las protestas sectoriales lo dio la constitución, a fines de 1992, de un nuevo conglomerado de sindicatos disidentes de la CGT, denominado inicialmente “Congreso de Trabajadores Argentinos” y que desde 1996 –con el nombre de *Central de Trabajadores Argentinos*- se presenta como una nueva entidad gremial de cúpula; ésta se planteaba como alternativa no sólo ideológica sino también organizativa a las viejas burocracias sindicales, intentando con bastante éxito nuclear a todos los sectores –sindicalizados o no- que estuvieran dispuestos a resistir el programa neoliberal. Ya para entonces la generalización de los costos del programa de reformas empezaba a hacerse notar de manera más contundente, a la vez que comenzaba a hacerse sentir el brutal efecto que el mismo provocaba sobre el mercado de trabajo y sobre la calidad del empleo y los ingresos. La lucha “contra el modelo económico” comienza a constituirse en el eje articulador de una virtual convergencia de acciones y actores colectivos. Sin embargo, el resultado inmediatamente visible será el de un rápido aumento de episodios focalizados de protesta y la emergencia de una multiplicidad de actores colectivos nucleados en torno a demandas específicas, junto con la incorporación de muchos sindicatos al campo de la resistencia al modelo económico (otro conjunto de sindicatos disidentes, sin apartarse de la CGT pero pretendiendo ejercer su misma representatividad, conformó una línea interna dentro de la misma denominada “Movimiento de Trabajadores Argentinos”).

Entre los episodios que marcarán el tránsito a un nuevo ciclo de protesta se destacan particularmente una serie de “estallidos” o “puebladas” que se producen en determinadas ciudades o pueblos del interior del país particularmente afectados, como tales, por las consecuencias del nuevo modelo económico. Un temprano antecedente es la rebelión que se produjo en 1993 en Santiago del

¹⁹ Etchemendy, Sebastián y Vicente Palermo. “Conflicto y concertación. Gobierno, Congreso y organizaciones de interés en la reforma laboral del primer gobierno de Menem (1989-1995)”. *Desarrollo Económico*, N° 148, 1998. Murillo, María Victoria. “La adaptación del sindicalismo argentino a las reformas de mercado en la primera presidencia de Menem”. *Desarrollo Económico*, N° 147, 1997.

²⁰ Palermo, Vicente. “¿Mejorar para empeorar? La dinámica política de las reformas estructurales argentinas”. En Novaro, Marcos, ed., *Entre el abismo y la ilusión. Peronismo, democracia y mercado*, Buenos Aires, Norma, 1999.

Estero, donde empleados estatales enfurecidos por el atraso en el pago de sus salarios encabezaron una protesta que incluyó la quema de varias oficinas gubernamentales y casas de conocidos funcionarios y políticos²¹. Pero es sobre todo a partir de 1996-1997 –particularmente en las provincias de Neuquén, Salta y Jujuy– que se suceden varios episodios en los que vastos sectores de una ciudad o pueblo se unen en una protesta generalizada contra el gobierno local y nacional y la política económica, apelando de manera sistemática al “corte de ruta” para asegurar su visibilidad y efecto disruptivo²².

En cuanto a la conformación de nuevos actores colectivos de carácter más estable, sin duda la gran novedad del período es la emergencia de los “movimientos de trabajadores desocupados”, particularmente en el Gran Buenos Aires y en otros grandes conglomerados urbanos donde se concentran grandes cantidades de población en situación de desempleo, empleo precario y pobreza. Los primeros movimientos surgieron en 1997 y desde entonces se han multiplicado, asumiendo perfiles diferenciados y estrategias políticas diversas. Si su constitución como tales tiene sin duda que ver con el rápido agravamiento de la situación social durante los noventa, en muchos casos los “MTD” se conforman a partir de experiencias previas de acción colectiva (como por ejemplo las tomas de tierra y asentamientos producidos a comienzos de los 80 en zonas del conurbano bonaerense), y en su emergencia inciden redes sociales y trayectorias militantes que confluyen en torno a determinados espacios barriales de sociabilidad²³.

En conjunto, las organizaciones de desocupados conforman analíticamente un “movimiento social” que comparte algunos rasgos fundamentales. En principio todas las organizaciones han venido apelando a los “cortes de ruta” (“piquetes”), un repertorio de larga data pero que en los últimos años cobró una importancia inédita y que a pesar de ser utilizado por diversos actores, ha quedado identificado básicamente con el movimiento de desocupados; de ahí que se haya generalizado la denominación de “piqueteros”, utilizada desde los medios de comunicación en un sentido muchas veces condenatorio (por la “incomodidad” que generan los cortes al resto de los ciudadanos), pero también reivindicada por los propios protagonistas por referir a una identidad colectiva que trasciende la condición estructural de desocupación. Por otra parte, más allá de sus diferencias, las organizaciones de desocupados están atravesadas por la disyuntiva que les impone la política del gobierno –impulsada justamente desde 1997– de otorgar planes sociales a los desocupados con la condición de realizar una suerte de contraprestación en trabajos o emprendimientos productivos. En la medida en que dichos planes son otorgados en principio por los municipios pero también pueden ser administrados por organizaciones no gubernamentales entre las que pueden incluirse las organizaciones de desocupados, para estas últimas la cuestión estratégica de cómo posicionarse frente a estas políticas resulta ineludible. Si bien los planes sociales pueden significar una “claudicación reformista” para aquellas organizaciones que pretenden encabezar una lucha que vaya más allá de la búsqueda de una reinserción laboral para sus integrantes, también pueden ser para ellas una fuente de recursos organizativos para nuclear a potenciales participantes primero en torno a la lucha por obtener los “planes”, y luego como punto de partida para construir micro emprendimientos productivos controlados autónomamente. El carácter disruptivo de los “piqueteros” y sus cortes de ruta se vuelve evidente y dará lugar a no pocos episodios de represión

²¹ Farinetti, Marina. "Violencia y risa contra la política en el Santiagueñazo. Indagación sobre el significado de una rebelión popular". *Apuntes de Investigación del CECYP*, N° 6, 2000.

²² Auyero, Javier. *La protesta*. Buenos Aires, Libros del Rojas, 2002. Cotarelo, María Celia. "La protesta en la Argentina de los '90". *Herramienta. Revista de Debate y Crítica Marxista*, N° 12, 2000. Delamata, Gabriela. "De los estallidos provinciales a la generalización de las protestas en Argentina. Perspectiva y contexto en la significación de las nuevas protestas". *Nueva Sociedad*, N° 182, 2002.

²³ Svampa, Maristella y Sebastián Pereyra. *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires, Biblos, 2003. Colectivo Situaciones. "Multiplicidad y contrapoder en la experiencia piquetera". En: Colectivo Situaciones. *19 y 20. Apuntes para el nuevo protagonismo social*. Buenos Aires, Ediciones De mano en mano, 2002. Obregón, Martín. "En torno a los orígenes de los movimientos de trabajadores desocupados. Identidad y cultura política en la zona sur del Gran Buenos Aires". Ponencia presentada en el *Pre-Congreso de la Asociación Argentina de Estudios del Trabajo*, La Plata, julio de 2003. Pinedo, Jerónimo. "¡A mí no me digas enano! La toma de la parroquia de San Francisco Solano". Ponencia presentada en las *Terceras Jornadas de Sociología de la UNLP*, La Plata, diciembre de 2003.

policial; más allá de sus exigencias puntuales explícitas y de los diversos matices políticos que los atraviesan, su sola presencia en el escenario político planteó desde un primer momento un claro desafío al sistema político introduciendo una alta dosis de incertidumbre respecto a la posibilidad de conservar condiciones de “gobernabilidad”.

Si durante el gobierno de Alfonsín la acción colectiva todavía seguía reproduciendo, aunque con actores y contenidos reformulados por la dictadura, los viejos patrones de la puja distributiva por el nivel del ingreso por parte de distintos sectores “incorporados” al sistema económico, a lo largo de la década del 90 el eje se irá trasladando a una desesperada lucha por recuperar la inclusión socioeconómica desde el desempleo y la pobreza, o al menos por evitar o compensar una caída que llega a afectar o amenazar a más del 50% de la población. Precisamente los sectores que permanecen “integrados” a través de un trabajo formal en el sector privado, sujetos a la amenaza del desempleo, tienden en este período a tener una muy baja propensión a participar de acciones colectivas de protesta; es el caso de la mayoría de los sindicatos del sector productivo, o los de las empresas de servicios privatizadas, que, aunque sometidos a una fuerte reducción de sus ingresos o a la precarización de sus empleos, se muestran reticentes a poner en juego su situación a través de la huelga o la protesta. En contraste con los años 70, y debido sin duda al cambio en el contexto económico general, los que están relativamente “mejor integrados” son ahora los menos movilizables. En el campo de protesta de los 90, el protagonismo lo tienen los “afectados” directamente por la exclusión.

Pero los efectos sociales del modelo neoliberal no son los únicos ejes convocantes de la protesta emergente de los años 90. Casos de impunidad policial, asesinatos no esclarecidos vinculados a personajes del poder político, las deficiencias en la investigación por los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel, diversos episodios visibles de corrupción, fueron provocando al mismo tiempo la emergencia de actores, organizaciones y episodios de protesta que a pesar de sus diferentes reclamos tendían a confluir en un cuestionamiento del gobierno menemista en torno al eje que podríamos identificar como de la **impunidad/corrupción** por parte de poderes locales o nacionales. Por otra parte, los organismos de derechos humanos, claros actores emergentes durante la dictadura militar, siguen teniendo una activa presencia en el campo de protesta; aquí cabe destacar como incorporación novedosa la aparición de la agrupación “H.I.J.O.S.”, formada por los hijos de los desaparecidos, que no sólo supone una nueva generación de familiares directamente afectados por la represión sino que introduce un nuevo repertorio de protesta, los denominados “escraches” a los represores. Bajo el lema “si no hay justicia hay escrache”, los Hijos identifican los domicilios de quienes actuaron como represores durante la dictadura y organizan frente a ellos una manifestación en la que ponen en evidencia, ante los vecinos del barrio en particular y ante la sociedad en general, que allí siguen viviendo impunemente personajes que deberían estar condenados por sus crímenes.

Si por un lado sus reclamos específicos siguen estando centrados en la necesidad de esclarecer, juzgar y castigar a los militares, la mayoría de estos movimientos han ido incorporando una demanda general de justicia e inclusión social, y se han plegado al eje de oposición al modelo económico consolidado durante el menemismo. Es claramente visible aquí cómo el “enmarcado” de los reclamos específicos se va compenetrando de demandas o agravios generados originalmente en otros sectores afectados, dando lugar a una progresiva convergencia en la que confluyen movimientos diversos; en este caso, la sugerida continuidad entre las políticas económicas menemistas respecto a las de la dictadura tiende un puente entre la cuestión de los derechos humanos y la de los efectos sociales de las políticas neoliberales, a la vez que resulta natural integrar a ambas con las críticas a la impunidad-corrupción del gobierno. Esta transversalidad de demandas y sentidos es visible también en importantes sectores del movimiento estudiantil, que más allá de movilizarse ante amenazas directas a la estructura de la educación pública y gratuita por parte del modelo neoliberal, lo hacen al mismo tiempo por los otros *issues* que hemos venido identificando. La conmemoración de los 20 años del golpe militar de 1976 dio lugar a multitudinarias manifestaciones en los principales centros urbanos, revitalizando la cuestión de la

represión pero incluyéndola en ese arco más amplio de acciones colectivas y reclamos que van constituyendo el nuevo horizonte de la protesta.

La multiplicidad de actores colectivos, nuevos y viejos, emergentes en el conjunto de la protesta social de los noventa tiende entonces a lograr cierta convergencia en torno al cuestionamiento del “modelo económico” y del gobierno menemista. Sin embargo, la articulación política explícita de los diversos actores y reclamos dista de manifestarse a través de un movimiento político que los contenga a todos en torno a un proyecto alternativo. Sólo en el terreno puramente electoral, parte de esta confluencia de demandas pudo expresarse en 1999 permitiendo el triunfo de la “Alianza” entre el Radicalismo y el Frepaso (un nuevo partido de centroizquierda) con la fórmula presidencial Fernando De la Rúa - Carlos “Chacho” Alvarez; lejos de ofrecer nítidamente un programa económico distinto al vigente, la coalición parecía sin embargo recoger las demandas de redistribución del ingreso y transparencia en el gobierno. Pero el estrepitoso fracaso del nuevo gobierno, que a poco andar comenzó a dar muestras de su falta de voluntad y/o capacidad política para ofrecer alternativas reales en las distintas cuestiones en juego, significó en los hechos un nuevo impulso hacia la convergencia de los distintos segmentos de la protesta social. En lo que hace a la política económica, el gobierno terminó convocando al Ministerio de Economía a Domingo Cavallo, quien no sólo no pudo mantener bajo control las variables económicas sino que terminó agravando los efectos ya letales del modelo en vigencia; las protestas recrudecieron y fueron sumando nuevos contingentes de “afectados”. Cuando hacia fines de 2001 el sistema financiero amenazaba con colapsar, Cavallo implementó el denominado “corralito”, que congelaba los depósitos bancarios impidiendo a los ahorristas retirar sus fondos por tiempo indeterminado: esta medida provocó la ira y la movilización de miles de ahorristas, lanzando al campo de protesta a sectores medios que hasta entonces no habían formado parte del *mainstream* de la acción colectiva. Si el “modelo” de la Convertibilidad aun conservaba algún prestigio, el “sacrificio” de los ahorristas terminó por liquidarlo definitivamente.

En los ya bien conocidos hechos de diciembre de 2001 se puso de manifiesto que la protesta social no sólo se había extendido a un amplísimo arco de actores sino que la convergencia en contra del “modelo” y del “menemismo” había evolucionado hacia un generalizado cuestionamiento a la clase política en su conjunto. La protesta de los ahorristas apelando a manifestaciones frente a los bancos y golpeando sus cacerolas, una oleada de saqueos a supermercados y comercios por parte de sectores empobrecidos del conurbano bonaerense, huelgas y piquetes protagonizados por trabajadores ocupados y desocupados fueron recalentando el ambiente político durante el mes de diciembre, a la vez que estas distintas expresiones de descontento se potenciaban mutuamente y aceleraban un proceso de implícita convergencia esta vez específicamente dirigida contra el gobierno de De la Rúa y su ministro Cavallo aunque rápidamente convertida en un repudio a la inmensa mayoría de los políticos, quienes salvo contadas excepciones se vieron súbitamente impedidos de circular por el espacio público a riesgo de ser objeto de ataques no solamente verbales. El desencadenante final del estallido generalizado fue el patético mensaje presidencial del día 19 por la noche, en el que De la Rúa, mostrando que sólo podía ofrecer como respuesta la represión, anunció el establecimiento del “estado de sitio” en todo el territorio nacional. Lejos de amedrentar, este mensaje fue respondido por la inmediata salida de miles de vecinos de clases medias a las calles golpeando sus cacerolas, mientras se organizaban para el día siguiente nuevos cortes de ruta y manifestaciones que confluyeron sobre la Plaza de Mayo; los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía -que respondió con una salvaje represión- fueron la nota trágica de la jornada del 20 de diciembre en la que el presidente De la Rúa decidió finalmente presentar su renuncia y abandonó en helicóptero la Casa de Gobierno.

Este pico de la movilización mantuvo su impulso por algún tiempo, forzando hacia fin de mes la salida del efímero presidente Rodríguez Sáa e incorporando un nuevo repertorio al campo de protesta, las “asambleas barriales”, en las que los vecinos comenzaron a reunirse espontáneamente y continuaron haciéndolo durante meses, discutiendo con perspectivas y matices diversos la necesidad de construir nuevos mecanismos de representación. En los momentos de auge de la movilización, la consigna “piquete y cacerola, la lucha es una sola” parecía indicar una unidad entre la protesta de

los sectores medios –afectados por la confiscación de sus ahorros, hartos de la corrupción y de una política económica que ya recortaba también su propio nivel de consumo- y las demandas de los que ya estaban claramente sumidos en la pobreza, excluidos de toda posibilidad de tener una fuente estable de trabajo e ingreso²⁴.

La consigna “que se vayan todos”, coreada insistentemente por los protagonistas de las diversas manifestaciones de diciembre, expresaba la condensación final de todos los reclamos acumulados, depositando la responsabilidad en el conjunto de “los políticos”. Sin negar la fuerza disruptiva que tenía en sí misma esta consigna –en tanto ponía al sistema político, y con él al orden social, ante un cuestionamiento “oceánico” que disparaba una enorme incertidumbre respecto a su posible recomposición-, al mismo tiempo reflejaba los límites del campo de protesta al no estar sustentada en una articulación política capaz de tener preparada una alternativa. De hecho, la caída del gobierno de la Alianza fue “resuelta” por el sistema político dentro de los carriles institucionales establecidos, y fue el Partido Justicialista el que finalmente logró recomponer (no sin dificultades) un nuevo equilibrio en el que la protesta volvió a fragmentarse. Como dijimos, el punto álgido de la movilización colectiva no retrocedió inmediatamente con el recambio de gobierno; durante 2002 y 2003, sin embargo, la protesta social fue cediendo terreno y sobre todo, tendió a diluirse la notable convergencia a la que se había llegado en diciembre de 2001.

En definitiva, una protesta social creciente que evolucionó fragmentariamente tendió a confluir en torno a consignas generales pero no a sustentarse en la construcción política efectiva de una opción alternativa de poder; la propia incapacidad política del gobierno de la Alianza y el enorme impacto simbólico que significó el haber defraudado bruscamente las expectativas puestas en el recambio presidencial de 1999 fueron una “oportunidad política” que contribuyó a condensar en un horizonte común a las distintas expresiones de la movilización colectiva. Dicho horizonte, sin embargo, no puede sino mostrar sus diferencias si se lo compara con la perspectiva que parecía presidir al “campo de protesta” de los setenta. El “modelo neoliberal” había desplazado al “sistema”, la antipolítica reemplazaba a la política revolucionaria; la disputa por el control de los frutos del crecimiento y del propio proceso productivo encabezada por actores movilizados surgidos de entre los sectores obreros más integrados, contrasta con la pelea que los más afectados por el modelo neoliberal están dando para sobrevivir. No es que no haya intentos por encauzar la acción colectiva actual hacia un horizonte –revolucionario o no- de transformaciones más profundas, ni que algunas prácticas de, por ejemplo, los movimientos de desocupados encarnen de hecho una alternativa real frente a las formas de sociabilidad establecidas; sin duda los hay, pero no han logrado hegemonizar de manera sostenible a la acción colectiva. Atravesando el campo de protesta, viejas estructuras de dominación asentadas en buena medida en prácticas clientelares siguen demostrando una notable capacidad para contrarrestar las opciones más disruptivas.

Al momento de escribir estas líneas, el sistema político a través de un viejo actor “aggiornado” ante las circunstancias, el peronismo, mostraba una notable capacidad para, en torno a la emergente figura del presidente Kirchner, reencauzar el conflicto social sin haber sin embargo resuelto los graves problemas sociales que habían exacerbado la movilización durante los noventa. Disipada la peculiar coyuntura política de 2001, neutralizado el problema de los ahorristas, y recuperada una cierta estabilidad económica que no deja de ser sin embargo precaria y costosa, los sectores medios –sin duda alentados por el discurso conservador y centrado en la idea de “orden” que transmiten los medios de comunicación- parecen volver el eje de sus reclamos hacia los problemas de la inseguridad urbana y muestran un creciente malhumor frente a las protestas de los desocupados que interrumpen el tránsito con sus manifestaciones. La movilización que culminó en diciembre de 2001 dejó sin embargo importantes saldos organizativos y experiencias colectivas cuya evolución está lejos de ser predecible.

²⁴ Svampa, Maristella. "Las dimensiones de las nuevas protestas sociales". *El Rodaballo*, Nº 14, 2002.